

Audiencia Provincial de Valencia. 26 de Marzo de 2009

Sentencia de la Sección 4ª de la **Audiencia Provincial de Valencia, de 26 de marzo de 2009**, que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación del Arquitecto Técnico coordinador de seguridad y salud laboral y condenado en el procedimiento de instancia, le absuelve del delito de lesiones que se le imputaba, desarrollando los principios de presunción de inocencia, los elementos del tipo penal de los delitos imprudentes y, en concreto, contra los derechos de los trabajadores, el principio de división del trabajo y de delegación de funciones en las obras e, incluso, la culpa de la propia víctima, significando en cuanto al coordinador de seguridad que no le corresponde la vigilancia y el control diario de que los trabajadores utilicen las medidas de protección colectivas e individuales, no teniendo obligación de permanecer permanentemente en la obra. Es curioso que la sentencia de la A.P. se refiere a los trabajadores afectados (entre ellos dos capataces) como “banda de imprudentes”, por haber eliminado las medidas de seguridad prescritas infringiendo con ello las previsiones del PSSL y las instrucciones del coordinador.

Juzgado de lo Penal nº 1 Pontevedra. 16 de abril de 2009

Sentencia del **Juzgado de lo Penal nº 1 de Pontevedra, de 16 de abril de 2009**, en causa seguida por siniestro laboral con resultado de muerte en el que figuraba como imputado el Arquitecto Técnico coordinador de seguridad y salud laboral, por presunto delito de homicidio imprudente, ejercitándose la acusación sólo por el Ministerio Fiscal, absolviéndosele al acusado por no apreciarse la necesaria relación de causalidad entre el comportamiento del imputado y el resultado dañoso producido, incluso si se hubiera producido infracción administrativa, significándose que no existe responsabilidad penal del artículo 142.1 del C.P. y de los artículos 316 y 318 del C.P. en relación con los artículos 14 y 17.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales cuando se han tomado las medidas preventivas necesarias, dado las instrucciones pertinentes, facilitado los equipos de protección y se ha prestado la formación adecuada en materia preventiva a los trabajadores.

Juzgado de lo Social nº 1 de Salamanca. 21 de abril de 2009

Sentencia del **Juzgado de lo Social nº 1 de Salamanca, de fecha 21 de abril de 2009**, dictada en Autos seguidos por accidente con resultado de muerte por caída de un operario desde una escalera metálica, en los que figuraba como demandado el Arquitecto Técnico coordinador de seguridad y salud laboral en fase de ejecución, al que se absuelve al entender que entre las obligaciones que le corresponden, a tenor de lo dispuesto en el R.D. 1627/1997, no figura la de una vigilancia constante de la realización de las obras ni la de impedir que en los centros de trabajo estén depositadas herramientas que no cumplen las prescripciones legales, no habiéndose denunciado en este caso defectos en el contenido del PSSL que aprobara aquél ni infracción de sus prescripciones.

Audiencia Provincial de Jaén. 23 de diciembre de 2008

Sentencia de la **Audiencia Provincial de Jaén (Sección 2ª), de 23 de diciembre de 2008**, por la que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por trabajador lesionado en accidente de trabajo contra la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Jaén que desestimó su demanda de reclamación de indemnización de daños y perjuicios, confirma la absolución de todos los demandados y, entre ellos, de la Arquitecto Técnico directora de la ejecución de la obra.

“**SEGUNDO.-** (...) Y por lo que respecta a la Aparejadora, a la que sí incumbe el control de las medidas de seguridad, como expresa la sentencia recurrida, con referencia a la responsabilidad in vigilando, está claro que sólo puede imputarse responsabilidad en el accidente ocurrido si se consigue acreditar la necesaria relación de causalidad entre su omisión y el accidente, para lo cual será preciso, por pura lógica, que conociera el inicio de las obras...”

Y lo cierto es que no se ha acreditado en modo alguno que se advirtiera por el dueño de la obra o promotor ni por otra persona a dicha codemandada tal inicio para poder comprobar las medidas de seguridad con que contaba. Por lo que no cabe imputarles la responsabilidad que se pretende, por omisión de medidas de seguridad, que precisa un comportamiento consciente, pues la responsabilidad por culpa sólo es exigible al que tenía obligación y posibilidad de hacer algo y no lo hizo; siendo evidente que si no se advierte del comienzo efectivo de la obra, no puede por pura lógica exigirse a la dirección facultativa responsabilidad por la inexistencia de las medidas de seguridad en la obra...

Audiencia Provincial de Badajoz. 3 de junio de 2008

Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz (Sección 3ª), de 3 de junio de 2008, dictada en el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia que desestimó la reclamación de indemnización por las lesiones sufridas por un trabajador en accidente laboral.

“De las diversas concausas del accidente, entre las que destaca en muy alto grado la propia y gruesa imprudencia de la víctima, aquí recurrente, (...) la que el recurso insiste en imputar (...) al demandado Sr. H. No es si no el hecho de que la red de protección instalada en el punto del suceso cediera, sin evitar por tanto la caída y daños corporales consiguientes del ahora apelante. Tal atribución de responsabilidad al arquitecto técnico parte de la creencia, equivocada legalmente, de que a tenor de los arts. 9º y siguientes del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, el “coordinador de seguridad y salud” (...) ha de responder de la aplicación, práctica y determinada, y constante, cabría añadir, de las medidas de seguridad que vengan establecidas para la obra de que se trate. Sin embargo, como la Sentencia examinada pone de relieve, es el contratista quien ha de elaborar su plan de seguridad y salud en el trabajo, (...) y el art. 11 (del citado Real Decreto) obliga al contratista, y no a otro, a cuidar del control periódico de las instalaciones y dispositivos de prevención de los riesgos laborales, y a cumplir y a hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud, todo ello ya directamente, ya con el concurso de empresas especializadas, como sucede en el caso.

Audiencia Provincial de Pontevedra. 8 de enero de 2008

Sentencia en materia de seguridad y salud laboral dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra, con fecha 8 de enero de 2008. La resolución revoca la condena dictada en instancia a dos arquitectos técnicos que asumían la dirección de ejecución de la obra por los delitos contra los derechos de los trabajadores y de lesiones por imprudencia grave. La Audiencia confirma, en cambio, la condena contra el administrador único de la empresa constructora y contra el jefe de obra y “responsable de seguridad”. Curiosamente, en el procedimiento nunca se imputó delito alguno a los arquitectos que desempeñaban las funciones de director de obra y de coordinador de seguridad y salud en materia de ejecución.

De entre los **hechos declarados probados** en el procedimiento destacamos los siguientes: “MGS (Un trabajador) con categoría de peón, se encontraba en la cuarta planta del edificio realizando funciones de izado de carretones de mortero, mediante el manejo de un maquinillo o pequeña grúa, instalada al pie de la placa de la planta y hacia el patio de luces de la construcción, hueco por donde se elevaba el material. Cuando el trabajador se disponía a recoger el carretón, éste volcó enganchando a M, que se precipitó al suelo por el hueco del patio de luces. En el momento de los hechos, M no hacía uso del cinturón de seguridad ni existía puntal donde anclarlo, careciendo el hueco de barandilla de protección por el punto donde realizaba su labor.”

La Sentencia comienza sentando la condición de **sujetos activos** de los arquitectos técnicos en los delitos contra los derechos de los trabajadores, si bien entre el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia que emplea para alcanzar tal conclusión se citan preceptos derogados —art. 1 A) aptdo. 3 del Decreto 265/1971— y algunas sentencias inactuales, lo que influye en la determinación de las concretas funciones del director de ejecución de obra y sus consiguientes responsabilidades.

Afortunadamente, en el caso que nos ocupa estos errores no condujeron a la condena de los colegiados, debido al acierto de la Audiencia al observar que la sentencia condenatoria de instancia no efectuaba análisis alguno sobre su **culpabilidad** (omisión de la diligencia debida en el caso concreto):

“No se encuentra, en definitiva, en la sentencia impugnada un análisis del elemento subjetivo en relación con cada uno de estos condenados. No se desprende de su contenido si los condenados llegaron a conocer la situación de las condiciones de trabajo descritas en los hechos probados, pero no a prever el riesgo para la salud de los trabajadores dimanantes de esas condiciones o si por el contrario no llegaron ni a su conocimiento y si esto fue así, las acciones u omisiones causantes de esa ignorancia; teniendo en cuenta que la normativa reguladora de sus funciones no les impone una asistencia permanente a la obra, sino con arreglo a la necesidad de intervención en cada uno de los diversos períodos del desarrollo de la misma (art. 6 Decreto 1935); a diferencia de lo que sí se exige al encargado o encargados de la protección y prevención de riesgos laborales en el centro de trabajo, art. 30 Ley 31/1995.

(...) Por tal ausente análisis de sus respectivas conductas profesionales, la sentencia no contiene, con respecto a estas condenas, una motivación suficiente para satisfacer el principio de tutela judicial efectiva y para desvirtuar el de

presunción de inocencia que como regla de criterio en la valoración de las pruebas ampara a los recurrentes. En ningún caso cabe obviar el principio de culpabilidad recogido en el artículo 10 del C.P.”

Esta Sentencia, que nos ha facilitado el Colegio de Pontevedra, **es firme**, no cabiendo contra la misma recurso ordinario alguno.

Juzgado de lo Penal nº. 8 de Valencia. 27 de marzo de 2008

Sentencia absolutoria dictada el 27 de marzo de 2008 por el Juzgado de lo Penal nº. 8 de Valencia, en el Procedimiento Abreviado 293/06, que absolvió al Arquitecto Técnico Coordinador de seguridad y salud laboral en fase de ejecución y al legal representante de la empresa contratista de los delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad y salud de los trabajadores que se les imputaban, resultando condenado únicamente el encargado de la obra y responsable de su seguridad y salud por expresa designación del contratista, en concepto de autor de una falta de muerte imprudente.

La sentencia hace un pormenorizado análisis del tipo penal en blanco del artículo 316 y concordantes del Código Penal con abundante cita jurisprudencial, entrando en aspectos tales como la presunción de inocencia, el carácter de intervención mínima del derecho penal, la delegación de responsabilidades por los legales representantes de las empresas en materia de seguridad y salud laboral, la intervención de los Servicios de Prevención ajenos, el valor pericial de los informes de las Inspecciones de Trabajo y, en las funciones y consiguiente responsabilidad de los Coordinadores de seguridad y salud laboral en las obras de construcción.

Así, se formulan en los Fundamentos de Derecho las siguientes consideraciones:

a) En relación con el tipo penal en blanco del artº. 316 del Código Penal:

La conducta típica requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

1.- No facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas.

2.- Infracción de las normas de prevención de riesgos laborales: el artº. 316 se configura como precepto penal en blanco, a completar con las normas de prevención de riesgos laborales, es decir, las contenidas en la Ley que lleva ese nombre, así como en “sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, que contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito” (artº. 1). En definitiva, el delito cuenta entre sus elementos con las “acciones u omisiones de los empresarios que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y de salud laboral sujetas a responsabilidades conforme a la presente Ley” (artº. 45.1). La reserva frente a la remisión de la ley penal a convenios colectivos se fundamenta en el riesgo cierto de que esa remisión se convierta en “una mera habilitación de instancias no legislativas para definir el contenido de los delitos”. Sin embargo, la introducción del convenio colectivo de eficacia normativa general regulado en el Estatuto de los Trabajadores es una consecuencia de la definición de lo que constituye el bloque de normatividad en materia de prevención de riesgos laborales, tal como imponen los artículos 1 y 45.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 5 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Ello no tiene por qué suponer confrontación con el principio de legalidad, ni con los de uniformidad e igualdad, puesto que se trata de una materia en la que la especialidad de las condiciones de trabajo determinadas es la que origina la puesta en peligro de los bienes jurídicos tutelados -definidos por el Código Penal-, y sin esa traducción a lo concreto, para la que resulta especialmente apto el convenio colectivo, no puede calibrarse de conducta infractora.

Las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo no son acreedoras de la calificación directa de normativa de prevención de riesgos laborales, y aunque el artº. 41 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social las equipara a la “normativa laboral, reglamentaria o paccionada”, lo hace a los solos “efectos de declaración de los derechos de los trabajadores en materia de accidentes de trabajo, enfermedad profesional y seguridad social”.

Por ello hay que entender que las normas jurídico-técnicas sólo son penalmente relevantes en la medida en que integren o desarrollen tal normativa, de modo que sea necesario tenerlas instrumentalmente en cuenta para afirmar o negar la existencia de su transgresión.

b) En relación con la responsabilidad objetiva de los empresarios:

Con carácter general debe señalarse que el artº. 316 del CP vigente castiga a aquellos que, “con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, y estando obligados legalmente, no faciliten los medios necesarios para que los

trabajadores desempeñen sus actividades con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan en peligro grave su vida, salud o integridad física” lo cual plantea ciertos problemas de delimitación del sujeto activo dado que nos encontramos, como señala la doctrina, en “el marco de una organización más o menos compleja como la empresarial, problema de índole fáctica y dogmática”. No obstante, la jurisprudencia del TS no suele distinguir entre mandos superiores, intermedios o de mera ejecución (TSSS 12 noviembre 1998 y 26 julio 2000); lo relevante es analizar detalladamente la conducta de las personas que tienen encomendada la vigilancia y supervisión de las condiciones en las que se desarrolla la actividad laboral, así como si éstas tienen en cualquiera de sus formas algún tipo de responsabilidad decisoria, pues el artº. 318 del CP habla de los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello.

En este sentido la delimitación de los obligados a establecer las medidas de seguridad adecuadas debe realizarse teniendo en cuenta la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como las disposiciones reglamentarias que la desarrollan según la actividad laboral que concretamente se esté desarrollando. Es decir, la seguridad en el trabajo es una tarea compartida por todas las personas que intervienen en los diferentes niveles de la organización del trabajo, y si bien el empresario es el que ostenta el poder de dirección y organización y en consecuencia es el obligado, por así decirlo, principalmente a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad laboral con las medidas de seguridad y salud adecuadas y de acuerdo con los riesgos que genere la actividad laboral que realicen, las demás personas están obligadas a vigilar el cumplimiento de dichas medidas, labor de vigilancia que no excluye en determinados supuestos la responsabilidad penal de los mismos. La STS de 11 julio 1980 habla de “... la vigilancia acerca de que se cumplan todas las medidas de seguridad reglamentariamente establecidas viene impuesta con carácter general a todos los que ejercen cargos de mando, desde el arquitecto hasta el simple encargado....”.

Sin embargo, también es cierto, que no deben producirse automatismo que lleven a verdaderas responsabilidades objetivas, sino que se debe ser en extremo cuidadoso en el análisis. Ciertamente la “sociedad del riesgo” muestra una fuerte tendencia al aseguramiento de los bienes jurídicos a costa de la seguridad jurídica, pero nunca hay que olvidar que el principio de culpabilidad en Derecho Penal exige que la imposición a alguien de una pena venga precedida por una atribución personal objetiva y subjetiva del comportamiento legalmente catalogado como injusto.

c) En relación con el valor probatorio de las actas de la inspección de Trabajo:

1.- Piénsese no ya en el ámbito penal, sino en otros órdenes, sobre un acta levantada más de tres meses después de los hechos que analiza la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 18 septiembre 1985):

“Que la infalibilidad que obligado es otorgar a las actas de Inspección de Trabajo quiebra esencialmente en el supuesto que se contempla tanto por razones de hecho o fácticas como por razones de procedimiento o derecho; y en cuanto a la primera, esa exclusión es consecuente con la tesis de la sentencia apelada, porque habida cuenta que los hechos acaecieron en 15 de marzo de 1979 y el acta de inspección se levanta en 16 de junio de 1979, es decir, tres meses después del accidente, hace que, esta falta de oportunidad en el tiempo, de inmediatez entre el hecho y la referencia que de los mismos se ha extendido en el acta, resta la posible viabilidad a esa narración tan tardía en el tiempo y es por ello, el que haya podido dar lugar a que se aporten otras pruebas tan concluyentes como la de la Jefatura de Bomberos del Ayuntamiento de Lérida presente en el lugar del siniestro, quien atribuye la causa de la ruina del altílo “no a la acumulación de escombros a que se refiere el acta, sino al deficiente e insuficiente anclaje de la jácena y algunas correas, defectos que están ocultos por los revoques, y que es observable al deshacer la estructura”, e insiste que “el derribo de la casa se llevaba con gran precaución y limpieza, que pudieron observar todos los asistentes al rescate de las víctimas, además el personal se refugió, para protegerse de la lluvia, en el sitio más inverosímil, pues en la parte trasera tenía amplias zonas protegidas, donde guardaban la ropa, y de acceso sin obstáculos, mientras que en el lugar del siniestro, los escombros les taponaban prácticamente el paso”, relato minucioso que neutraliza el que se ha hecho con posterioridad en el acta para llegar a la imputabilidad de los hechos a las empresas sancionadas”.

d) En relación con los Servicios de Prevención.

1.- En las actividades laborales serán muchas las ocasiones en las que el empresario no es una persona física, sino jurídica y en las que, en todo caso, la actividad laboral se desarrolla de forma tal que, por el número de trabajadores, la complejidad de la actividad empresarial, su diversidad de sedes, no quepa un control directo, por parte del empresario, de la tarea de prevención. En estos casos, la responsabilidad recaerá sobre la persona en quien se haya delegado expresamente el cumplimiento de las funciones –con atribución expresa de las competencias en la materia, incluidas, evidentemente, aquéllas que permiten la sanción del trabajador que no atiende las órdenes en materia de prevención y la paralización de la obra. El empresario, en este caso, responderá de la adecuada selección

del delegado y de la provisión al mismo de los medios adecuados para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad e higiene, así como de la vigilancia de que el mismo cumple sus funciones. En la actualidad, los artºs. 30 a 32 de la LRPL regulan la delegación de las funciones de prevención bien en trabajadores –servicio de prevención interno–, bien en un servicio externo.

La sentencia 653/1994, de 26 de marzo, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, reconoce que “....no es humanamente posible que quienes deben ejercer su posición de garante, que requiere, por su naturaleza, una distribución de funciones, puedan realizar personalmente todas las operaciones necesarias para el cumplimiento del deber. Por ello, el ordenamiento jurídico reconoce el valor exonerante de la responsabilidad a la delegación de la posición de garante, cuando tal delegación se efectúa en personas capacitadas para la función y que disponen de los medios necesarios para la ejecución de los cometidos que corresponden al deber de actuar....”.

e) En relación con las funciones de los Coordinadores de Seguridad y Salud Laboral.

La exigencia de una previsión legal que fije la responsabilidad de una persona concreta en el cumplimiento de aquellas prevenciones en materia de seguridad cuya omisión sea causa de una situación de riesgo es un elemento objetivo del tipo penal del artº. 316 del Código Penal, sin el cual no cabe apreciar la concurrencia de responsabilidad penal. De otro modo se entendería objetivamente el reproche penal de forma incompatible con el principio de culpabilidad. En este sentido merece la pena transcribir los argumentos de la sentencia dictada por la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 8 de noviembre de 2005:

“Consta acreditado que el mentado aparejador (que era el Coordinador de Seguridad de la construcción) aprobó el Plan de Seguridad de la obra, por lo que cumplió con la obligación que le impone el apartado b) del artº. 9 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras en construcción, sin que, por otro lado, ni ese Real Decreto ni ninguna otra norma legal le imponga la obligación de controlar directamente que los trabajadores apliquen los métodos correctos de trabajo pues ello no sólo devendría imposible por elementales razones físicas de ubicuidad en tanto que una persona no puede estar simultáneamente en distintos lugares, sino que, además, entraría en contradicción con el apartado e) de ese mentado precepto, en el que se le impone la obligación de “coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo”, pero no el control directo sobre esa correcta aplicación de los métodos de trabajo. En el caso de autos, no hemos de olvidar, se trata de unos trabajos de traslado de material (tubos para retirar escombros) que se realizan en sábado y sin conocimiento -no se ha probado lo contrario- del mentado aparejador. En esas concretas circunstancias, es manifiesto que no puede predicarse una responsabilidad penal para el recurrente, ni, por ende, para su aseguradora, pues difícilmente se puede coordinar las acciones de control respecto de la aplicación de los métodos correctos de trabajo cuando esos trabajos, sencillamente, se desconoce que se vayan a realizar.

Llegados a este punto, se hace preciso recordar que el juicio de culpabilidad que haya de hacerse respecto de todos y cada uno de los acusados, habrá de residenciarse sobre el grado de conocimiento de la concreta situación de riesgo y sobre su capacidad de actuación en esa materia pues, de no exigirse ese grado de proximidad con la fuente del riesgo, estaríamos extendiendo la responsabilidad penal hasta los confines propios de la responsabilidad objetiva, produciendo un efecto perverso del Derecho Penal y del principio de culpabilidad personal sobre el que se apoya. Dicho de otro modo, si no se quiere caer en reproches postulados de pura responsabilidad objetiva, habremos de exigir que la conducta del responsable criminal se erija en fuente generadora del riesgo y que el sujeto sea subjetivamente culpable del evento lesivo, lo que implica que, con conocimiento y previsión del posible resultado dañoso, omita la diligencia que le es exigible, requisitos todos ellos del crimen imprudente que no son observables en el proceder del hoy recurrente, pues difícilmente se puede prevenir lo que no se conoce.

Cierto es que el gruísta carecía de la necesaria formación y que la empresa S.L., por cuenta de la cual prestaba sus servicios, no realizó cursillo de formación (así resulta probado a través de las declaraciones prestadas en juicio), más esa carencia de formación no puede imputárselo al dicho Coordinador de Seguridad, sino a los contratistas y subcontratistas dado que el artº. 16 de aquel meritado Real Decreto 1627/1997, dispone claramente que “de conformidad con el artº. 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra”.

A mi juicio, respecto de este acusado, a la vista de la documentación aportada por su defensa, y las alegaciones efectuadas, necesariamente debía procederse a su absolución (de hecho el MF no le acusa). Y es que en el Libro de Órdenes y Asistencias aparece el día 09.03.2001 que recuerda a la empresa constructora la necesidad de que el Plan de Seguridad y Salud sea cumplido en su totalidad por todo el personal que haya en la misma, tanto propio como subcontratado, tanto personal director como suministradores o montadores de medios auxiliares.

Además el día 22.02.2002 (poco antes de los hechos) aparece que se toman unas medidas ordenando que cualquier elemento de seguridad que deba ser retirado por necesidades del trabajo puntual debe ser repuesto de inmediato una vez terminado el motivo. Después se hacen distintos apercebimientos, así el relativo al caso indicando que su incumplimiento será motivo de expulsión de la obra y el relativo al lanzamiento de escombros.

Juzgado de lo Penal nº 2 de A Coruña. 18 de octubre de 2007

“.....No es la indemnización la función principal del ámbito penal....”

“...El Estudio de Seguridad es calificado por el Ministerio fiscal como “extenso y completo”. Así pues, si en la elaboración del Estudio su trabajo merece elogios, la única posibilidad de que haya incurrido en algún tipo de responsabilidad es en su labor de **coordinación**. Al respecto, y frente a lo que las acusaciones insinuaron en Juicio, **su trabajo no consiste en permanecer de forma constante en la obra, cuidando de que las medidas de seguridad se respeten, sino en coordinar** con los responsables de la obra la aplicación del Plan.”

“...es imposible que pueda estar constantemente en obra, cuando en cada obra en concreto, la **vigilancia** para que se respeten las normas de seguridad se ha de realizar, **bien por los trabajadores designados** como responsables del servicio de prevención, o bien mediante la contratación de un servicio externo al respecto.”

“...como los propios técnicos de trabajo depusieron en Plenario, la **Coordinación de Seguridad y salud no es sujeto pasivo de la ley de Prevención de Riesgos Laborales.**”

Audiencia Provincial de Barcelona. 26 de septiembre de 2006

“Sentado el marco general en que se desenvuelve la actividad del arquitecto técnico, integrante, junto con el arquitecto superior (sic), de la dirección facultativa, ha de señalarse inmediatamente después que **el mero hecho de tener determinada titulación técnica, e incluso el de desempeñar un determinado puesto en la estructura organizativa, no determina por sí la autoría a título de delito** del artículo 316 CP o de lesiones por imprudencia si el accidente ocurre por falta de medidas de seguridad en una obra, sino que habrá que determinar en cada caso cuál sería la acción u omisión imputable a cada uno de los acusados y cuál es la relación causal entre tal acción y omisión y el resultado. Más concretamente, **será necesario establecer cuál era el ámbito y el poder de decisión real de cada uno de los imputados cuya condena se solicita**, pues sólo así podrá establecerse si estaba dentro de ese ámbito concreto –más allá de las funciones abstractas atribuidas por el legislador a su profesión o a su titulación universitaria- adoptar la medida concreta de seguridad o la disposición sobre el modo de realización de los trabajos que hubiera podido evitar el accidente, ya que la **responsabilidad penal ha de tener su origen en la culpa personal** y en la violación personal de una norma socio-cultural vinculante, no en criterios formales”.

“En definitiva, si el acusado S.B. se personó en la mañana de autos en la obra, si habló con el encargado sobre las medidas de seguridad a instalar, si exigió que no comenzaran los derribos hasta que él las supervisara una vez colocadas, y si **su presencia en el lugar no era exigible legal o reglamentariamente en el momento de colocar las medidas**, no existe prueba suficiente sobre que haya incurrido en una actuación dolosa o culposa subsumible en los tipos penales por los que se formula acusación; salvo que se pretenda que el aparejador deba explicar a cada uno de los trabajadores de la empresa cómo colocar las medidas de seguridad, cosa que no parece exigible visto que él no decide quién se va a encargar en concreto de esa labor; o que deba permanecer día y noche a pie de obra, lo que tampoco resulta exigible.

Audiencia Provincial de Valencia. 29 de diciembre de 2006

Sentencia favorable en materia de seguridad y salud laboral dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, con fecha 29 de diciembre de 2006, en la que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, se confirma la absolución del arquitecto técnico redactor del Estudio y coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución previamente decidida por el Juzgado de lo Penal. Asimismo, se rebaja a falta la condena impuesta a la representante legal de la contratista.

Según los **hechos declarados probados** en el procedimiento, el accidentado era encargado de la obra y contaba con 35 años de experiencia, produciéndose el siniestro cuando se disponía a colocar una puerta de al menos 52 Kg, con la ayuda de un operario. Cuando desempeñaba esta tarea, la puerta se desequilibró y cayó encima de él, lo que provocó que se precipitara por el hueco de escalera hasta el piso inferior, causándole importantes lesiones. El hueco, que se

encontraba a una distancia aproximada de un metro desde la puerta, carecía en ese momento de elementos de protección, aunque previamente estuvieron instalados.

De los **pronunciamientos** de la Sentencia resaltamos los siguientes:

“SEGUNDO. El Juez entiende que el trabajador lesionado fue sometido a una situación de grave riesgo para su integridad, ante el incumplimiento de una serie de obligaciones en materia de seguridad e higiene (entre otras no existía plan de seguridad y salud en desarrollo del estudio)

...

Incumplimientos que no podemos negar que existen mas (...) se nos hace muy difícil admitir que posean la entidad suficiente como para rebasar el límite de lo punible a virtud de este delito, dado que indudablemente constituyen unas graves infracciones en materia laboral, que de hecho han motivado la iniciación del correspondiente expediente sancionador, así como que ponen en evidencia una gran desorganización en la empresa, mas dichos elementos hacen que nos debamos cuestionar hasta qué punto existe una relación de causalidad entre esas graves infracciones y la situación de riesgo a la que quedó expuesto el trabajador, o al menos por su directa participación aquella gravedad no quedara en cierta medida atenuada. Haciendo que, aunque coincidamos con los hechos que declara probados la sentencia, no podamos coincidir con las conclusiones de índole jurídico que liga a los mismos.

En tal sentido no podemos dejar de lado que no se trata de un trabajador bisoño, de un mero aprendiz al que se le encomienda una tarea que desborda completamente sus posibilidades (...), lo que sin perjuicio de que (...) debiera existir un técnico superior o un especialista que de alguna manera coordinara los diferentes elementos personales, aglutinando a todas las empresas, lo que quizá incumbiera al Arquitecto Técnico desde el momento en que fue designado coordinador de seguridad y elabora el plan básico (sic)..., no por ello podemos desconocer que (el accidentado) debía ostentar un papel rector de esos trabajos ... tratándose de una persona que posee una gran experiencia profesional...tampoco sería ajeno a la propia víctima la inexistencia de las correspondientes vallas en el hueco libre de la escalera... de lo que no existe dudas es que esas vallas llegaron a estar dispuestas en el lugar...”

“TERCERO. Por lo que se refiere al recurso formulado por el Ministerio Fiscal, no cabe duda que la posición del Arquitecto Técnico, ... hace que no surjan dudas en torno a su eventual responsabilidad, mas ante la degradación que de la responsabilidad se ha operado, y que en definitiva no queda completamente precisado hasta qué punto le incumbiera de forma directa la elaboración de las normas de desarrollo de su plan (sic), ni que asumiera unas funciones supervisoras de las normas de prevención durante el desarrollo diario de la obra, así como que igualmente afectaría a su eventual responsabilidad el hecho que no puede ignorarse del papel, en alguna medida, rector u organizador que desempeñaba la propia víctima....”

Juzgado de lo Penal nº 2 de Reus (Tarragona)

“A más preguntas de la defensa, la **pericial cualificada se vuelve absolutamente contundente** cuando a la pregunta de que si desde el punto de vista de Inspección de Trabajo, en una obra existen los medios de seguridad colectivos e individuales a disposición de los trabajadores, y aún así se produce un accidente de trabajo, puede hablarse de responsabilidad de las empresas, responde que **“difícilmente”, entendiéndolo que no es posible un control absoluto sobre el uso de los medios de seguridad**, siendo posible la concurrencia de accidente fortuito o por imprudencia del trabajador, como en este concreto caso”.

“Por todo, **amén del principio de presunción de inocencia que asiste a los acusados, sólo cabe la libre absolución** de todos ellos con todos los pronunciamientos favorables”.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo. 10 de febrero de 2006

“(…) no se puede imputar negligencia no mala praxis a ninguno de tales técnicos cuando, por demás y a lo largo de la construcción de la edificación en cuanto a lo proyectado y lo previsto en el estudio de seguridad fue objeto de un seguimiento que podemos calificar de riguroso por parte del aparejador, autor del estudio de seguridad, quien, en varias ocasiones, realizó anotaciones y advertencias en libro de órdenes relativas a medidas de seguridad que habían de acogerse en el desarrollo de la construcción (...).”

Juzgado de lo Penal nº 4 de Murcia. 16 de mayo de 2006

De la prueba practicada se concluyó que no se produjo infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales, habida cuenta que en la fecha del accidente (mayo de 2000) no se utilizaban, en obras de las

características del caso de autos, redes bajo encofrado. Se probó correcta la solución adoptada en el Plan de Seguridad y Salud de emplear un sistema de encofrado continuo, más seguro que el inicialmente previsto en fase de proyecto, y descartándose justificadamente el uso de cinturones de seguridad.

A estos efectos probatorios la Sentencia destaca **“la muy precisa y esclarecedora pericia ofrecida por el Sr. Garrido Hernández, cuyo informe se adjunta al escrito de defensa de la aseguradora del arquitecto técnico”**.

“desde las anteriores reflexiones, la única solución coherente con el resultado de la prueba practicada no es, desde luego, la calificación como delito imprudente de lesiones, por cuanto difícilmente puede hallarse en la conducta de los acusados la omisión de elementales normas de cuidado que cualquier persona debe observar, en cuanto las **medidas omitidas ni venían impuestas por la normativa laboral**, ni eran **generalmente o significativamente aplicadas en esa fecha**, en obras de las características citadas. (...) Siendo ello así, no puede compartirse ni que todo resultado lesivo para un trabajador presuponga la omisión de las medidas de seguridad exigidas ni que, caso de haberse omitido alguna, la conducta sea penalmente típica.

Sentencia de Tribunal Superior de Justicia - Barcelona, Cataluña - Sala de lo Social. 7 de febrero de 2005

“La **dificultad de supervisar la actuación del trabajador**, ya que se trata de un lugar alejado de la empresa donde se prestaban los servicios y ésta no tenía medios ni ocasión de tutelar la actuación del trabajador, **es una afirmación inadmisble** desde el punto de vista del deber integral de seguridad que obliga a cualquier empresa con respecto a sus empleados que tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene en el trabajo (art. 14 LEY 31/95) y la conducta del empleador transgrede las normas elementales de seguridad en relación con lo acontecido, porque incluso **la apuntada experiencia del empleado o incluso su imprudencia no temeraria debe ser adecuadamente prevista, controlada y evaluada por la empresa** (art. 15.4 LPRL) y no puede ser motivo de que la empresa baje la guardia o manifieste su impotencia ante dificultades de garantizar adecuadamente la seguridad del trabajador, pues se reitera que es una obligación ineludible e imprescindible el garantizar la seguridad”

“El empresario que no pueda vigilar personalmente el cumplimiento de las medidas de seguridad, **debe delegar tal cumplimiento en alguna persona de su empresa con permanencia en obra. Si no existe delegación concreta y específica en algún trabajador** -ya sea el Delegado de Prevención, el Recurso Preventivo, o cualquier otro trabajador designado al efecto- **tal función es necesariamente asumida por el Encargado de Obra o el Jefe de Obra**. Son estas personas las que, por delegación del empresario, deben asumir dicha función de vigilancia y control del cumplimiento de las medidas de seguridad. Por lo tanto, la imposibilidad que tienen los técnicos -a diferencia de figuras como el Encargado de Obra o el Recurso Preventivo- de vigilar y controlar en todo momento los trabajos que se realizan en la obra, se alza como principal argumento de su defensa frente a la posición de estos encargados.”

Sentencia de A. Provincial Madrid. 2 de noviembre de 2006

“...la condena de encontraría su causa en su consideración como encargado o jefe de obra, términos que se utilizan indistintamente, y por no haber dado “indicaciones de cómo y hasta dónde proceden al llenado de la cubeta”.

“...tales indicaciones sí fueron dadas por el responsable de la grúa y de cuya competencia o calificación no cabe dudar. El encargado se nos aparece como ajeno al ámbito de actuación del gruista, sin que existan razones objetivas para exigirle una labor de supervisión, tutela o vigilancia sobre él, contraria al principio de confianza, dentro del título de encargado, título que a la vista de la prueba practicada aparece con un contenido inespecífico y que, en cualquier caso, no cabe extender a un deber de garantía respecto de la actuación del otro condenado.

Audiencia Provincial de Álava (Sección 2ª). 23 de diciembre de 2008

Auto de la Audiencia Provincial de Álava (Sección 2ª), de 23 de diciembre de 2008, dictado en el recurso de apelación interpuesto, entre otros, por la defensa del Arquitecto Técnico Coordinador de Seguridad y Salud, contra el Auto del Juzgado de Instrucción de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado, en el que este técnico resultaba imputado junto con el representante legal de la promotora, el autor del plan de prevención de riesgos laborales de la constructora y el encargado de obra.

La Sala revoca el Auto del Juzgado Instructor en lo que respecta únicamente a la imputación del Coordinador de Seguridad y Salud, sobreseyendo libremente la causa en la que él concernía, al entender en su Fundamento Jurídico QUINTO que:

“QUINTO.- (...) En realidad, el Plan de Seguridad no lo redacta el Coordinador, sólo lo aprueba (art. 9 del Real Decreto 1627/1997) y la tarea de este técnico es, precisamente, la de coordinar, no la de vigilar, función que corresponde a otros responsables (encargado de la obra, recurso preventivo, etc.). Como decíamos en nuestro reciente auto de 16 de diciembre de 2008, con cita de otros anteriores, el coordinador de seguridad “no es un operador encargado de vigilar la ejecución de los trabajos a pie de obra y cada día (...) No es tarea del coordinador la diaria y constante vigilancia de la efectiva aplicación de las medidas de prevención de riesgos y las obligaciones profesionales legalmente establecidas no pueden interpretarse de manera extensiva para responsabilizarle de cualquier fallo de la seguridad, pues cada uno de los operadores de la obra con deberes sobre esta materia tiene sus propias obligaciones y responsabilidades, a veces claramente discernibles”.

En tanto no constan indicios de una relación de causalidad entre el accidente laboral y un concreto y supuesto incumplimiento de deberes profesionales por parte del imputado, el proceso no puede seguir frente a él, por mucho que entendamos de manera extensiva el concepto de “medios” del que habla el artículo 316 del Código Penal, y las mismas razones excluyen una posible imputación por imprudencia con resultado de lesiones”.

Juzgado de lo Penal nº. 1 de León. 7 de abril de 2009

Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº. 1 de León, con fecha de 7 de abril de 2009, en los Autos de Procedimiento Abreviado 386/2005, que absuelve al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de los delitos de lesiones y contra los derechos de los trabajadores de los que estaba acusado. Absuelve, igualmente, al representante legal de una empresa subcontratista y condena al encargado de dicha empresa por ambos delitos.

Resulta de interés en esta Sentencia el razonado análisis que lleva a cabo en su Fundamento de Derecho V, sobre la conducta del Arquitecto Técnico coordinador de seguridad, por remisión al concepto del dominio fáctico sobre la fuente de riesgo, tal y como viene siendo entendido por los Tribunales de Justicia, como elemento necesario para la tipificación de conductas en el tipo penal del artículo 316 del C.P., en base todo ello a las funciones y cometidos que a los coordinadores atribuye la normativa legal aplicable y, concretamente, el artículo 9 del R.D. 1627/1997, llegando a la conclusión expresa y terminante de que no se encuentra entre aquellas la vigilancia de las medidas de seguridad, que incumben a otros (en el año 2002, en el que ocurrió el accidente, caída de un trabajador a un foso en construcción, no se había introducido aún en la normativa la figura de los recursos preventivos), sin que la eliminación temporal por exigencias del trabajo de las protecciones del foso, prescritas en el P.S.S.T. de la empresa, por decisión de su encargado en la obra y sin conocimiento del Coordinador -ausente por vacaciones colocara al técnico en la posición de “auténtico dominio del hecho”, desencadenante del accidente.

Resulta especialmente esclarecedor a la declaración que en el Fundamento de Derecho citado se contiene y a continuación se transcribe:

“Los coordinadores de seguridad tienen como misión elaborar, o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, el estudio al que se refiere el artículo 5 del Real Decreto 1627/1997, con el contenido detallado en la propia norma citada, documento que debe tener en cuenta, entre otras disposiciones obligatorias, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, con identificación de las zonas en la que se presten trabajos incluidos en uno de los anexos que prevé, así como sus correspondientes medidas específicas. Ningún tipo de censura se ha dirigido al estudio elaborado y suscrito por el Sr., ni por las partes acusadoras ni por el Inspector de Trabajo. Antes bien la propia acta de la Inspección de Trabajo, uno de los documentos más importantes que se han aportado, e indudablemente objetivo e imparcial, incluye plurales referencias a las determinaciones del Plan de Seguridad y Salud que no aparecen acompañadas de reproche o censura alguna y que se toman como referentes válidos y eficaces en orden al cumplimiento del nivel de seguridad exigible en la obra.

“..... es indudable que cuando el Coordinador o cualquier persona integrada en la dirección facultativa aprecie el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, debe advertir al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el Libro de incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de los trabajos o en su caso, de la paralización de la obra, pues así lo prescribe expresamente el artº. 14 del real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Sin embargo, eso no significa que el Coordinador deba mantenerse a pie de obra en todo momento ejerciendo una continuada tarea de fiscalización. El Coordinador debe coordinar las actuaciones de las

SENTENCIAS JUDICIALES EN MATERIA DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

distintas empresas concurrentes en la ejecución de la obra. **Sus funciones son de simple coordinación, tal como establece el artº. 9 del Real Decreto 1627/97, habiendo de dar a los empresarios y al personal ejecutor de los trabajos las instrucciones o directrices necesarias, incumbiendo a otros la vigilancia de tales medidas.** No es responsabilidad del coordinador la de anticiparse a cualquier fallo de la seguridad. La vigilancia de las medidas de seguridad no incumbe al Coordinador de Seguridad, sino a otros, sin perjuicio de ese deber positivo y grave de actuar, tan pronto constata un fallo, que previene el artº 1.14 del real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre”.